



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

INFORME SECRETARIAL

Barranquilla, 26/01/2021

Radicado	08001-33-33-014-2021-00010-00
Medio de control o Acción	Tutela
Demandante	Atenogenes Antonio Mora Rodriguez
Demandado	Nueva E.P.S.
Juez (a)	Guillermo Osorio Afanador

INFORME
Señor juez, paso el expediente de la referencia, contentivo de una acción de tutela, informando que el mismo fue asignado a este Despacho por reparto. Contiene solicitud de Medida provisional. Consta de un cuaderno principal de 24 folios.

PASA AL DESPACHO
Tutela para admitir con solicitud de medida provisional.

CONSTANCIA
Acta individual de reparto del 26/01/2020

ALBERTO LUIS OYAGA LARIOS
SECRETARIO

Ultimo Folio Digitalizado y número de cuaderno	Firma de Revisado



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Barranquilla, veintiséis (26) de enero de dos mil veintiuno (2.021).

Radicado	08001-33-33-014-2021-00010-00
Medio de control o Acción	Tutela
Demandante	Atenogenes Antonio Mora Rodriguez
Demandado	Nueva E.P.S.
Juez (a)	Guillermo Osorio Afanador

CONSIDERACIONES

El señor **Atenogenes Antonio Mora Rodriguez**, presenta demanda en ejercicio de la Acción de tutela contra la **Nueva E.P.S.**, solicitando el amparo a los derechos fundamentales a la vida.-

Previo a decidir lo que corresponda sobre la admisión de la acción de tutela, advierte el Despacho que en el presente caso se solicita una medida provisional con el fin de proteger los derechos fundamentales del accionante, de conformidad con los artículos 7 del Decreto 2591 de 1991 y 230 de la Ley 1437 de 2011.

Ahora bien, respecto a la medida provisional solicitada por el accionante, es de señalar que la acción de tutela, prevista por el artículo 86 de la Constitución Política, faculta a toda persona para reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares, en los casos en que así se autoriza.

El Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción de tutela, establece que el juez constitucional cuando lo considere necesario y urgente para proteger el derecho “suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere” y dicha suspensión puede ser ordenada de oficio o a petición de parte. En efecto, el artículo 7, dispone:

“Artículo 7o. Medidas provisionales para proteger un derecho. Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere. Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público. En todo caso el juez podrá ordenar lo que considere procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante. La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud por el medio más expedito posible. El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de conformidad con las circunstancias del caso”

En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que las medidas provisionales pueden ser adoptadas en los siguientes casos: “(i) cuando resultan necesarias para evitar que la amenaza contra el derecho fundamental se convierta en una violación o; (ii) cuando habiéndose constatado la existencia de una violación, estas sean necesarias para precaver

Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

que la violación se torne más gravosa” 1. (Autos A-040A de 2001 (MP: Eduardo Montealegre Lynett), A-049 de 1995 (MP: Carlos Gaviria Díaz), A-041A de 1995 (MP: Alejandro Martínez Caballero) y A-031 de 1995 (MP: Carlos Gaviria Díaz).

Dice además la Corte que las medidas cautelares pueden ser adoptadas durante el trámite del proceso o en la sentencia, pues “únicamente durante el trámite o al momento de dictar la sentencia, se puede apreciar la urgencia y necesidad de la medida”. (Auto 035 de 2007.)

En cuanto a la procedencia de la medida de suspensión provisional la Corte Constitucional ha expresado:

“La medida de suspensión provisional de actos concretos debe ser razonada y no arbitraria, producto de una valoración sensata y proporcional a la presunta violación o amenaza de los derechos fundamentales alegados. Así entonces, el Decreto 2591 de 1991, efectivamente permite suspender provisionalmente la aplicación de actos concretos que amenacen o vulneren un derecho fundamental, pero solamente cuando sea necesario y urgente para la protección del derecho, lo cual exige, por parte del juez de tutela, un estudio razonado y conveniente de los hechos que lleven a la aplicación de la medida”[4].¹

De igual forma, para proceder a decretar una medida, la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que toda medida provisional debe cumplir con dos principios *fumus boni iuris*, y el *periculum in mora*, como lo estableció en la sentencia SU-913 del 2.009, diciendo:

“(…) En tanto se analizaron dos de los más importantes principios que rigen la práctica de medidas cautelares, para efecto de garantizar un justo término de equidad en el proceso. Estos son: el periculum in mora y el fumus boni iuris, los cuales deben aparecer de forma concurrente para asegurar la proporcionalidad y congruencia de la medida. El primero, periculum in mora, tiene que ver con el riesgo de que al no adoptarse la medida cautelar sobrevenga un perjuicio o daño mayor del que se expone en la demanda, que de no precaverse, transforme en tardío el fallo definitivo. Tiene igualmente que ver con un temor fundado de que el derecho se frustre o sufra menoscabo durante la sustanciación del proceso. El segundo, fumus boni iuris, aduce a un principio de veracidad en cuanto a la afectación del derecho invocado como fundamento de la pretensión principal. Estos dos principios, asegura la doctrina, deben operar de manera concurrente, al punto que la falta de uno de estos elementos, debe dar lugar a que: i. se rechace la medida cautelar o ii. Se otorga la medida pero de manera limitada. Por ejemplo, si el valor de la causa en juicio ejecutivo es proporcionalmente mínimo a la solvencia del demandado, la medida carecerá de periculum in mora, caso en el cual no habrá necesidad de hacer juicio alguno sobre el principio fumus boni iuris, pues de plano resulta innecesaria la medida”

Más recientemente, la Sala Plena de la Corte Constitucional, reorganizó estos requisitos en solo tres². Aunque simplifica el análisis, también lo hace más estricto para el juez de tutela que pretenda aplicar el artículo 7º del Decreto 2591 de 1991. De acuerdo con esta reformulación, la procedencia de la adopción de medidas provisionales está supeditada al cumplimiento de las siguientes exigencias:

¹ T-733 de 2013

² Auto 312 del 2018 M.P. Luis Guillermo Guerrero

Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

“ (i) Que la medida provisional, para proteger un derecho fundamental o evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público, tenga vocación aparente de viabilidad por estar respaldada en fundamentos fácticos y jurídicos razonables, es decir, que tenga la apariencia de un buen derecho (fumus boni iuris);

(ii) Que exista un riesgo probable de que la protección del derecho invocado o la salvaguarda del interés público pueda verse afectado considerablemente por el tiempo transcurrido durante el trámite de revisión, esto es, que haya un peligro en la demora (periculum in mora); y

(iii) Que la medida provisional no genere un daño desproporcionado a quien afecta directamente.”

Teniendo en cuenta lo anterior, la accionante en este caso, solicitó como medida provisional que:

“(…) En aras a la protección de mi vida, sírvase Su señoría ordenar de manera URGENTE Y SIN DILACIÓN obligue a la entidad NUEVA EPS Y A QUIEN CORRESPONDA, representadas en BARRANQUILLA por su director o que haga sus veces, suministre sin restricción alguna el medicamento: APALUTAMIDA 60 MG Y TODO LO QUE ÉL REQUIERA PARA SU ENFERMEDAD, del cual fue radicado y debe ser entregado mensualmente, pero desde su radicación no ha sido suministrado. (...)”

En consonancia, esta agencia, encuentra preciso señalar al respecto que la Corte Constitucional se ha referido a la configuración del perjuicio irremediable recientemente en sentencia T-020 de 2.018, con ponencia del Dr. José Fernando Reyes Cuartas, lo siguiente: *“De la configuración del perjuicio irremediable, se adujo que precisa verificarse: “(i) una afectación inminente del derecho -elemento temporal respecto al daño-; (ii) la urgencia de las medidas para remediar o prevenir la afectación; (iii) la gravedad del perjuicio -grado o impacto de la afectación del derecho-; y (iv) el carácter impostergable de las medidas para la efectiva protección de los derechos en riesgo[58].” Adicionalmente, se aclaró que: “...cuando la acción de tutela es promovida por personas que requieren especial protección constitucional, como (...) personas en condición de discapacidad, (...) entre otros, el examen de procedibilidad de la acción de tutela es menos estricto, a través de criterios de análisis más amplios, pero no menos riguroso”*

Al respecto, considera el Despacho que es pertinente acceder a dicha solicitud, teniendo en consideración la edad del señor Atenogenes Antonio Mora Rodriguez, quien tiene 78 años de edad, tal como se observa con la fecha de nacimiento de su documento de identidad que se aporta con la demanda de tutela.

Asi mismo, se observa en Fòrmula Mèdica allegada que su estado de salud es de imperiosa protección por parte del Estado, puesto tiene por diagnóstico principal TUMOR MALIGNO DE LA PRÓSTATA, además que no puede darse prelación a asuntos de índole administrativo que de manera clara resultan abiertamente transgresores a los derechos fundamentales del accionante y contrarios a lo prescrito en la Constitución Política de 1.991 y lo desarrollado jurisprudencialmente por la H. Corte Constitucional.

Por tanto, conforme a lo anterior, y ante el evidente carácter de urgente de la medida solicitada, se ordenará a la **Nueva EPS**, que dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, le haga entrega al señor Antenogenes Antonio Mora Rodriguez, el medicamento tal como transcribió el médico tratante adscrito a la E.P.S.:



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

“APALUTAMIDA 60MG/1U/TABLETAS DE LIBERACIÓN NO MODIFICADA, 4 DOSIS, ORAL (...)” por el termino de 15 días.-

Así mismo, se resalta de una de las pruebas allegadas en la demanda de tutela, debe vincularse al presente trámite a la **Farmacias Éticos**, en calidad de tercero con interés en el proceso, no demandado, ante eventuales ordenaciones que lo afecten.

Ahora bien, decidido lo anterior, se advierte a las partes que el trámite de la presente acción de tutela se adelantará a través de los medios electrónicos y las decisiones se notificarán a las cuentas de correo electrónico que las partes informen a la Secretaría del Despacho.

Los informes, memoriales y recursos a los que tengan derecho las partes se presentarán a través del correo electrónico institucional del Despacho adm14bqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co

Las decisiones que se adopten durante el trámite tutelar se registrarán en el software de gestión judicial “Siglo XXI”, que podrá ser consultado en la página web de la Rama Judicial en el link <https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/procesos/bienvenida>

Por último y al reunir los requisitos exigidos por el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991 y de conformidad con lo establecido en el núm. 2º del artículo 1º del decreto 1382 de 2000 y decreto 1983 de 2017, se,

RESUELVE:

1. CONCEDASE Y DECRÉTESE la siguiente medida provisional:

- **ORDENASE a la Nueva EPS**, que dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, le haga entrega al señor Antenogenes Antonio Mora Rodriguez, el medicamento tal como transcribió el médico tratante adscrito a la E.P.S.: *“APALUTAMIDA 60MG/1U/TABLETAS DE LIBERACION NO MODIFICADA, 4 DOSIS, ORAL (...)”* por el termino de 15 días.

2. ADMÍTASE la demanda de tutela interpuesta por el señor Antenogenes Antonio Mora Rodriguez, contra la **Nueva E.P.S.**

3. VINCULESE al trámite de tutela a la sociedad **Farmacias Éticos** en calidad de tercero con interés en el proceso, no demandado, ante eventuales ordenaciones que lo afecten.

4. NOTIFÍQUESE personalmente el contenido de este auto al Representante Legal de la **Nueva E.P.S.** y/o quien haga sus veces, al igual que al gerente y/o administrador de la sociedad **Farmacias Éticos** y/o quien haga sus veces, por el medio más expedito y eficaz.

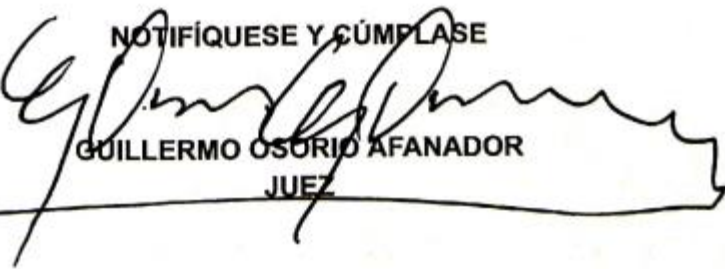
5.- COMUNÍQUESE el contenido de este auto a la accionante, por el medio más expedito y eficaz.

6. INFÓRMESE a la entidad demandada y a la sociedad vinculada, que en el término de dos (2) días y por el medio más expedito pueden rendir informe sobre los hechos objeto de la presente acción, advirtiéndole que la información suministrada se considerará rendida bajo la gravedad del juramento y que la inobservancia a contestar acarrea las sanciones consagradas en los Arts. 19, 20 y 52 del Decreto 2591 de 1991.



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

7. TÉNGANSE como pruebas, en lo que fuere conducente, los documentos aportados por la parte demandante en su escrito tutelar.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GUILLERMO OSORIO AFANADOR
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADO
LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO
ELECTRONICO

N° 004 DE HOY 27/01/2021 A LAS 8:00 A.M.



ALBERTO LUIS OYAGA LARIOS
SECRETARIO
SE DEJA CONSTANCIA QUE SE LE DIO CUMPLIMIENTO AL
ARTICULO 201 DEL CPACA